

MÓDULO 2:
SEGURIDAD SOCIAL
1ª edición
2021

UNIDAD 6
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORAS
AUTÓNOMOS.

Ana María Orellana Cano.

Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España.
Doctora en Derecho Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid.

EDICIÓN DEL CURSO
DAVID MARÍN CASTAÑO

Licenciado en Derecho
Profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de FOL
Técnico Superior en PRL

ÍNDICE

I. CAMPO DE APLICACIÓN.

1. Ámbito subjetivo.
2. Exclusiones.

II. AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS.

III. COTIZACIÓN.

IV. PRESTACIONES.

1. Requisitos generales.
 - 1.1 Estar afiliados, en alta o en situación asimilada a la del alta.
 - 1.2 Estar al corriente en el pago de las cotizaciones.
 - 1.3 La invitación al pago de las cuotas adeudadas.
2. Incapacidad temporal.
 - 2.1 Requisitos.
 - 1.2 Cuantía.
3. Nacimiento y cuidado del menor.
4. Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.
5. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
6. Incapacidad permanente.
7. Jubilación.
8. Prestaciones por muerte y supervivencia.
9. Prestación por cese de la actividad.

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

Paul Auster- Novelista y poeta estadounidense (Nueva Jersey 1947)

I. CAMPO DE APLICACIÓN.

La protección social de los trabajadores incluidos en el Estatuto del Trabajo Autónomo se instrumenta a través del Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, sin perjuicio de algunas particularidades que presentan los trabajadores autónomos económicamente dependientes y, salvo que, por razón de su actividad, tengan que estar incluidos en otros regímenes especiales que integran trabajadores por cuenta propia, tal como el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

No obstante, lo anterior, el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas es mayor que el del Estatuto del Trabajo Autónomo, ya que incluye algunos colectivos no encuadrados en este último, como los religiosos de la Iglesia Católica, los deportistas de alto nivel, los notarios y, los socios de cooperativas que hayan optado en sus estatutos por su incorporación al Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas.

1. ÁMBITO SUBJETIVO.

Con carácter general, de acuerdo con el art 305.1 de la Ley General de la Seguridad Social, estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

El párrafo segundo del precepto indicado declara expresamente comprendidos en este régimen especial:

1. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

2. Los que ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. A continuación, la norma contempla una presunción iuris Estatuto de los Trabajadores e iure y, dispone que se presume, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. Y, también contempla varias presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario. De este modo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.
- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.
- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurren las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad.

3. Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias.

4. Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común.
5. Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.
6. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
7. Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia que requiera la incorporación a un colegio profesional.
8. Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.
9. Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes.
10. El personal estatutario de los servicios de salud, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por las actividades complementarias privadas que realicen y que determinen su inclusión en el sistema de la Seguridad Social.
11. El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que realicen trabajos de forma habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena.
12. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores.
13. Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de inclusión mediante norma reglamentaria en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas.

2. EXCLUSIONES.

El artículo 306 de la Ley General de la Seguridad Social excluye a los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores

del Mar y, a los socios, sean o no administradores, de sociedades de capital cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios.

II. AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS.

El alta y la cotización, es única, aunque el trabajador desarrolle simultáneamente varias actividades que den lugar a su inclusión en este régimen.

Los plazos para solicitar la afiliación y las altas en este régimen especial son los mismos que en el Régimen General. La solicitud de alta se presenta en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma donde radique el establecimiento o, en su defecto, donde tenga su domicilio. Para estos trabajadores el código de cuenta coincide con su número de Seguridad Social.

Las altas fuera de plazo tienen efectos desde el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para la inclusión en este régimen especial. En estos supuestos, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, son exigibles las cotizaciones correspondientes a períodos anteriores a la formalización del alta y, sólo producen efectos, en orden a las prestaciones, una vez que hayan sido ingresadas con los recargos e intereses que legalmente procedan. Las cuotas prescritas no son exigibles, ni computables para percibir prestaciones. La Tesorería General de la Seguridad Social ha de dar cuenta de las altas solicitadas fuera de plazo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Con carácter general, los familiares del empresario, que reúnan los requisitos exigidos, pueden ser dados de alta como trabajadores por cuenta ajena. No se consideran trabajadores por cuenta ajena, los que realicen trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a

cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción. De lo expuesto, se extrae que podrán ser dados de alta como trabajadores por cuenta ajena los familiares del empresario que realicen una prestación de servicios voluntaria, retribuida, por cuenta ajena y bajo la dependencia del empresario; que no convivan con él.

Para ello, además de la documentación prevista con carácter general, se ha de acompañar una declaración del empresario y del familiar. Pero el trabajador autónomo está exonerado de la presentación de esta declaración, cuando contrate como trabajadores por cuenta ajena, a sus hijos menores de 30 años, aunque conviva con ellos. A partir de esta edad, para que puedan continuar incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, el autónomo tendrá que presentar la indicada declaración en el plazo de 30 días naturales siguientes al cumplimiento por el hijo de los 30 años. En tales supuestos, los hijos que convivan con el autónomo no cotizan por desempleo hasta cumplir los 30 años.

III. COTIZACIÓN.

La obligación de cotizar al Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas nace en los siguientes momentos:

1. Desde el día en que concurran en el sujeto obligado a cotizar los requisitos para su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial, en el supuesto en que se posibilitan hasta tres altas dentro del año natural.
2. Desde el día primero del mes natural en que concurran las condiciones determinantes para la inclusión en su campo de aplicación del sujeto obligado a cotizar, en el resto de las altas, así como en el caso de altas solicitadas fuera de plazo reglamentario.

3. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social practique el alta de oficio, desde el día primero del mes natural en que resulte acreditada la concurrencia de los requisitos para la inclusión en su campo de aplicación.

La no presentación de la solicitud de alta no impide el nacimiento de la obligación de cotizar.

La obligación de cotizar se extingue:

1. Desde el día en que las condiciones de inclusión en su campo de aplicación dejen de concurrir en el sujeto de la obligación de cotizar, en el supuesto en que se posibilita hasta tres bajas dentro del año natural, siempre que la baja se comunique en el tiempo y la forma establecidos.

2. Al vencimiento del último día del mes natural en el que las condiciones de inclusión en su campo de aplicación dejen de concurrir en el sujeto obligado a cotizar, en el resto de las bajas, siempre que la baja se comunique en el tiempo y la forma establecidos.

3. En los casos en que no se comunique la baja no se extingue la obligación de cotizar sino hasta el último día del mes natural en que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga conocimiento del cese del trabajador en su actividad por cuenta propia.

4. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social practique la baja de oficio, por tener conocimiento del cese en la actividad, la obligación de cotizar se extingue el último día del mes natural en el que haya cesado la actividad, salvo que el interesado acredite que tuvo lugar el cese en otra fecha.

En relación con el importe de la cotización, debe resaltarse que el autónomo puede elegir la base de cotización, siempre que se encuentre entre el tope legal de la base mínima y máxima establecida anualmente. El tope máximo será el del 220 por ciento de la base mínima de cotización.

De conformidad con el Real Decreto ley 2/2021, a partir del 1 de febrero de 2021 y, mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021, no va a ser de aplicación la previsión sobre el aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de la disposición transitoria 2ª del Real Decreto ley 28/2018, por lo que los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas van a ser los vigentes a 31 de diciembre de 2020.

La cobertura de las contingencias profesionales para los trabajadores autónomos es obligatoria.

IV. PRESTACIONES.

A continuación, procederemos a ver las prestaciones de los trabajadores autónomos.

1. REQUISITOS GENERALES.

Los trabajadores autónomos tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social siempre que, además de reunir los requisitos exigidos en cada una de ellas, estén afiliados y en alta, o situación y, se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

1.1 ESTAR AFILIADOS, EN ALTA O EN SITUACIÓN ASIMILADA A LA DEL ALTA.

El autónomo deberá estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas para poder lucrar las prestaciones de la Seguridad Social, o bien estar en situación asimilada a la del alta.

Se consideran en situación asimilada a la de alta a:

1. Las personas que causen baja en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, por haber cesado en la actividad que dio lugar a su inclusión. La situación asimilada al alta se mantiene durante los 90 días naturales siguientes al último día del mes de la baja. A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor es también situación asimilada al alta, la de la trabajadora durante el citado período de 90 días posteriores a la baja en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, como declararon las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014 (Rcud 2546/2013) y de 19 de diciembre de 2016 (Rcud 602/2015).
2. Los trabajadores de temporada, durante el período que media entre las mismas, con una duración como máximo de 12 meses.
3. Los que hayan suscrito un convenio especial con la Seguridad Social.
4. La trabajadora víctima de la violencia de género durante el tiempo en el que se haya visto obligada a cesar en su actividad, con suspensión del deber de cotizar.
5. El autónomo que cause baja en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas y, a continuación se inscriba como demandante de empleo, se considerará en situación asimilada a la del alta por paro involuntario, como declaró la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2007 (Rcud 1574/2005).

1.2 ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES.

El trabajador autónomo sólo podrá causar el derecho a percibir las prestaciones de Seguridad Social si está al corriente en el pago de los contratos anteriores al hecho causante.

El aplazamiento del pago de las cotizaciones concedido con anterioridad a haber causado el derecho a lucrar la prestación conllevará que se considere al

autónomo al corriente del pago de las cuotas. Pero si el aplazamiento se ha reconocido con posterioridad al hecho causante de la prestación, no se considerará al corriente en el pago de las cotizaciones y, al estar en descubierto, deberá procederse a la invitación al pago, como declaró la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2016 (Rcud 858/2015).

En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 (Rcud 3131/2013) afirmó que la mera solicitud de aplazamiento en el pago de las cuotas, no equivale al cumplimiento del requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas.

Cabría plantearse, a estos efectos, qué ocurre si el trabajador autónomo presenta descubiertos de cuotas, pero que están prescritas. En estos casos, se considerará que está al corriente en el pago de las cuotas, pero las prescritas no serán computables para acreditar el periodo de carencia de la prestación.

En esta línea, se pronunció, entre otras, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2012 (Rcud 1967/2011).

1.3 LA INVITACIÓN AL PAGO DE LAS CUOTAS ADEUDADAS.

Si el trabajador autónomo reúne el periodo de carencia exigido para lucrar la prestación de Seguridad Social, pero no está al corriente en el pago de sus cotizaciones, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 2530/1970, procede la invitación al pago, para que las ingrese en el plazo de treinta días naturales. Ante ello pueden producirse los siguientes supuestos:

1. Que el autónomo atienda a la invitación e ingrese el importe de los descubiertos dentro del plazo, en cuyo caso, se le considerará al corriente a los efectos de causar la prestación solicitada.

Y ello aunque adeude otras cuotas en otros regímenes de la Seguridad Social, según consideró la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013 (Rcud 2514/2012).

En este sentido, se pronunció la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2020 (Rcud 2226/2018), en relación con el reconocimiento de una pensión de jubilación a un trabajador autónomo.

2. Que el autónomo atienda a la invitación, pero habiendo transcurrido el plazo de los 30 días, en cuyo caso, se le reconocerá la prestación menos un 20%, si se trata de prestaciones de pago único y subsidios temporales; y, si se trata de pensiones vitalicias, se reconocerán con efectos a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que tuvo lugar el ingreso de las cuotas adeudadas.

Es importante resaltar que la invitación al pago únicamente procede cuando se ostenta la carencia suficiente para causar la prestación y, tan solo a los efectos de estar al corriente en el pago de las cuotas, como señaló la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2019 (Rcud 2796/2017).

Y, como declaró la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2020 (Rcud 2084/2018) no es posible reclamar a la Seguridad Social que se le reconozca al autónomo la pensión y que, con cargo a la misma se vayan pagando los descubiertos de las cuotas, es decir, no cabe compensar lo adeudado en concepto de cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas con lo que se vaya percibiendo de pensión.

2. INCAPACIDAD TEMPORAL.

La cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes es obligatoria para los trabajadores autónomos, salvo para el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios.

No obstante, los trabajadores que tengan cubierta la prestación por incapacidad temporal en otro régimen del sistema de la Seguridad Social, en el que también se encuentren de alta, pueden, mientras se mantenga la situación de pluriactividad, acogerse voluntariamente a la cobertura de esta prestación o renunciar a ella. Esta posibilidad de opción o renuncia no es de aplicación a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

2.1 REQUISITOS.

La prestación de incapacidad temporal es igual a la del Régimen General, con algunas especialidades. Para tener derecho a la prestación económica de incapacidad temporal en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, el autónomo tendrá que acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Estar afiliado y en alta o en situación asimilada a la del alta.
2. Tener cubierto un período mínimo de cotización, si deriva de enfermedad común, de 180 días dentro de los últimos 5 años. Si deriva de accidente, sea o no de trabajo, o enfermedad profesional no se exige periodo de carencia.
3. Que el interesado se halle al corriente en el pago de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social, siendo, en su caso, de aplicación el mecanismo de invitación al pago.
4. Que presente ante la correspondiente entidad gestora o mutua, en modelo oficial, la declaración sobre la persona que va a gestionar directamente el establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza del que sea titular o, en su caso, el cese temporal o definitivo en la actividad.

2.2 CUANTÍA.

La cuantía diaria del subsidio es el resultado de aplicar a la base reguladora unos determinados porcentajes. La base reguladora de la prestación está

constituida por la base de cotización del trabajador correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30.

Los porcentajes para aplicar son los siguientes: desde el día 4º al 20º de la baja, ambos inclusive, el 60%; y, a partir del día 21º, el 75%. Si el subsidio se origina a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se cobrará el 100 % de la base reguladora desde el primer día.

3. NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR.

Los autónomos tienen derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor con la misma extensión, términos y condiciones previstos para los trabajadores del Régimen General, tanto la prestación contributiva como la no contributiva, con las especialidades que señalo a continuación.

La prestación económica contributiva por nacimiento y cuidado de menor consiste en un subsidio equivalente al 100% de una base reguladora cuya cuantía diaria es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas al Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas durante los 6 meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre 180. De no haber permanecido en alta durante la totalidad del referido período de 6 meses, se divide entre los días en que el trabajador haya estado en alta en el régimen dentro de ese período.

Los períodos durante los que el trabajador por cuenta propia tiene derecho a percibir el subsidio no contributivo por nacimiento y cuidado de menor son coincidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su distribución, con los períodos de descanso laboral establecidos para los trabajadores por cuenta ajena, excepto en lo referente a la posibilidad de percibir el subsidio compatibilizándolo con una jornada a tiempo parcial, en cuyo caso la percepción del subsidio y la reducción de la actividad solo puede efectuarse en el porcentaje del 50%.

4. RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.

Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural de los trabajadores autónomos son iguales a las del Régimen General, salvo algunas precisiones.

Se consideran situaciones protegidas:

1. Por riesgo durante el embarazo, aquella en que se encuentra la trabajadora embarazada durante el período de interrupción de la actividad profesional en los supuestos en los que el desempeño de la misma influya negativamente en su salud o en la del feto y, así se certifique por los servicios médicos de la entidad gestora o mutua correspondiente. Por lo tanto, no se considera situación protegida a estos efectos la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente si no están relacionados con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de la actividad desempeñada.

2. Por riesgo durante la lactancia natural, se entiende el período de interrupción de la actividad profesional durante el período de la lactancia natural en los supuestos en los que el desempeño de la misma pueda influir negativamente en la salud de la mujer o en la del hijo menor de 9 meses y así se certifique por los servicios médicos de la entidad gestora o mutua correspondiente.

Las prestaciones correspondientes a estas situaciones tienen la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales. La prestación consiste, en ambos casos, en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.

5. CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave para los autónomos presenta las siguientes especialidades:

1. Se considera situación protegida, los periodos de cese parcial en la actividad para el cuidado de los menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave.
2. Los porcentajes de reducción mínima de la jornada de trabajo se entienden referidos a una jornada de 40 horas semanales.
3. Para el reconocimiento y el abono de la prestación es requisito imprescindible hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, siendo de aplicación, en su caso, el mecanismo de la invitación al pago.

6. INCAPACIDAD PERMANENTE.

La prestación de incapacidad permanente en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas es igual a la del Régimen General, con escasas peculiaridades. Y así, ha de resaltarse que no procede la declaración de la incapacidad permanente parcial derivada de accidente no laboral o enfermedad común, como declaró la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2017 (Rcud 3757/2015). Pero sí cabe la incapacidad permanente parcial cuando deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

7. JUBILACIÓN.

La pensión de jubilación del autónomo está equiparada a la del Régimen General, con las siguientes especialidades:

1. Edad. La edad ordinaria de jubilación es de 65 años, si se tienen cotizados 37 o más años y, de 65 años y 10 meses, si se tienen cotizados menos de 37 años.

Tienen derecho a la jubilación anticipada en los mismos términos que en el Régimen General, pero no tiene derecho a la jubilación parcial pues, aunque

está prevista tal posibilidad, aun no se ha producido el desarrollo reglamentario que la misma prevé.

2. Cuantía. La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala establecida para el Régimen General, en función exclusivamente de los años de cotización efectiva del beneficiario. La cuantía a percibir como pensión se abona mensualmente con dos pagas extraordinarias.

3. La pensión de jubilación del Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas es compatible con la actividad por cuenta propia, en dos supuestos:

3.1 En el caso de la jubilación activa. Es posible compatibilizar el trabajo por cuenta propia con el 100% de la pensión, siempre que se acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. Sólo se aplica a los autónomos personas física y no a las sociedades.

3.2 Cabe complementar la pensión de jubilación con los ingresos generados por una actividad por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. Los ingresos se computan netos, es decir, los ingresos íntegros menos los gastos fiscalmente deducibles.

8. PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA.

Se reconocen en los mismos términos que en el Régimen General.

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2012 (Rcud 1967/2011) declaró que, como el derecho a la pensión de viudedad es imprescriptible, la solicitud se puede efectuar mientras permanezca la situación protegida de viudedad, debiendo la entidad gestora invitar al pago de las cuotas pendientes en la fecha del hecho causante, incluso de aquellas que hubieran prescrito con posterioridad.

9. PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD.

La cobertura de la acción protectora por cese de actividad es de carácter obligatoria para los trabajadores autónomos y debe formalizarse con una mutua. El autónomo debe optar por la misma mutua colaboradora para toda la acción protectora.

Para tener derecho a la protección por cese de actividad, los trabajadores autónomos han de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar a la fecha del cese de actividad afiliados y en alta.
2. Solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas a causa del cese de actividad.
3. Tener cubierto el período mínimo de cotización exigido de 12 meses, siendo computable a tal efecto el mes en el que se produzca el hecho causante de la prestación.
4. Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad y, acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora.
5. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
6. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas, sin perjuicio de la posibilidad de la invitación al pago, siempre que el trabajador autónomo realice el pago en el plazo improrrogable de 30 días. La regularización del descubierto produce plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

El hecho causante se entiende producido el último día del mes en que tenga lugar la situación legal de cese de actividad.

Desde el 1 de febrero de 2021, se establece una nueva una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del COVID-19.

Deben estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadoras Autónomas, antes del 1 de enero de 2021 y, hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Cabe la invitación al pago, en caso de descubiertos.

La cuantía de la prestación de cese de actividad es igual al 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Esta cantidad se incrementa en un 20% si el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.

No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones es del 40% por ciento, no siendo de aplicación la previsión anterior para familias numerosas.

El derecho a la prestación nace desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente. Su percepción tiene una duración máxima de 4 meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.

